

## CRISIS 2.0

Ha quedado ya suficientemente claro que lo que comenzó como una gran contracción del crédito en 2007 se ha expandido, convirtiéndose en un estancamiento de ámbito más amplio y gran pertinacia, centrado en los principales países de la OCDE. Las decisiones tomadas por varios gobiernos para evitar el colapso los han convertido a ellos mismos en blanco de la especulación financiera. Las medidas de rescate adoptadas durante la primera fase de la crisis entre 2007 y 2009 por las autoridades estadounidenses, británicas y de la eurozona acrecentaron la deuda pública entre un 20 y un 40 por 100 del PIB respectivo, con grandes déficits por cuenta corriente. La transferencia de deuda de manos privadas a las públicas se llevó a cabo invocando la necesidad de impedir una crisis sistémica, pero en cierto modo agravó el problema, ya que la quiebra de algunos bancos, por perturbadora que fuera, siempre sería menos devastadora que la quiebra del Estado. A las pocas semanas los mercados de bonos estatales ya estaban exigiendo planes para reducir el déficit moderando el gasto público y en particular la protección social. El centroizquierda y el centroderecha estaban ya persuadidos de que el Estado de bienestar es demasiado caro y burocrático y de que hay que reducirlo y repartirlo entre los proveedores privados. Las instituciones y los servicios públicos se habían apalancado mediante la emisión de deuda, a expensas de futuros ingresos y de la inteligibilidad de las cuentas públicas. Los gobernantes y comentaristas neoliberales, decididos a no desaprovechar la oportunidad de una buena crisis, se valieron de la zozobra generalizada para impulsar sus propios planes. Japón, Estados Unidos y el Reino Unido arrastran un pesado lastre, pero al disponer de una moneda propia pueden imprimir dinero y devaluarla, recurso que se le ha negado hasta ahora a la eurozona; aun así, esos países más afortunados son todavía demasiado vulnerables a las miserias de Eurolandia porque invirtieron mucho en sus activos y cuentan con ella como socio comercial.

Los gobiernos de Estados Unidos y de la eurozona no afrontan exactamente los mismos problemas, pero están parecidamente paralizados, dando tumbos de un remedio paliativo a otro. Se ha impuesto austeridad a los países más débiles de la eurozona, mientras que los más fuertes proclaman la necesidad de liquidar el déficit pese a que todo un coro de

eminentes analistas económicos –desde Martin Wolf hasta Paul Krugman y desde Wolfgang Münchau hasta Nouriel Roubini– insisten en que la austeridad no hará más que dificultar la recuperación. Ningún caso corrobora más esa advertencia que el del Reino Unido, ya que su gobierno ha utilizado deliberadamente su margen de maniobra para decidir unas restricciones totalmente contraproducentes.

Mientras los gobiernos y las organizaciones internacionales se enfangan en la crisis, parece resultarles imposible actuar a la escala que requiere una contracción tan considerable. La opinión pública se ha indignado contra los banqueros, pero los gobiernos se siguen sometiendo a los mercados de deuda que exigen recortes en la protección social y un nuevo empuje a la privatización y mercantilización de las pensiones, la sanidad y la educación. La protección social está siendo desmantelada al mismo tiempo que los trabajadores, jóvenes y viejos, se ven arrojados al vertedero. Los desempleados afrontan la miseria y los que todavía tienen empleo sufren los empujones que los lanzan en brazos de caros proveedores privados. Cuantos más países se comprometen con la austeridad más grave se hace la Gran Recesión, dejando a sus ciudadanos en manos de los proveedores comerciales de servicios y reforzando el dominio de un nuevo régimen del capital financiero. Pero la mercantilización y las finanzas privadas también están sometidas a límites y obstáculos intrínsecos. Las finanzas privadas, por muy hábilmente que se apalanquen, carecen de la envergadura necesaria para superar la contracción. Los proveedores privados de pensiones y otras protecciones sociales están plagados de inseguridad, costes de mercado y una lógica que los acucia a discriminar a las mujeres y las minorías. A un nivel aún más básico, internet ha debilitado los derechos de «propiedad intelectual», ha socavado los medios comerciales y ha cuarteado el sector de la música. La secuenciación del genoma humano y el despliegue de la nanotecnología se han resistido hasta ahora a la mercantilización, y la colonización del ciberespacio por el capital –por ejemplo mediante la mercantilización íntima de Facebook– mantiene todavía una escala demasiado pequeña para compensar esos bloqueos.

A medida que se profundice la crisis, se acentuarán la necesidad y la urgencia de propuestas constructivas para una salida genuina hacia la izquierda. En lo que sigue presentaré algunas de las políticas alternativas que se han propuesto dentro del sistema existente, así como algunas perspectivas más radicales –de transición– a largo plazo. En primer lugar, no obstante, examinaré con mayor detalle algunas de las «medidas de rescate» aplicadas hasta ahora y ofreceré un balance de las múltiples aflicciones del mundo de la Crisis 2.0, en la que los gobiernos, hogares y corporaciones financieras están tratando de aminorar o «desapalancar» sus deudas. El resultado ha sido estancamiento, desempleo, destrucción del bienestar e instalación en los gobiernos de coaliciones tecnocráticas carentes de un mandato electoral. Argumentaré que las estrategias de resistencia tendrán que afrontar las causas subyacentes de la crisis –sobrecapacidad global, demanda deficiente y creación anárquica de crédito– para

ser eficaces. Propongo una expansión generalizada de la demanda agregada global basada en la subida de salarios en los países donde son más bajos, el alivio de la deuda en los países pobres y ricos, nuevos planes de protección social y una arquitectura financiera orientada a la utilidad pública.

## I. UNA CRISIS REALIMENTADA

Las actuales tribulaciones de las economías de la OCDE provienen de tendencias impetuosamente inducidas por el neoliberalismo y la globalización: desigualdad extrema, pobreza, desregulación financiera, privatización y una financiarización general del ciclo vital vía los créditos estudiantiles, hipotecas, deudas de las tarjetas de crédito y pensiones privadas. Los bajos salarios en las economías emergentes y el endeudamiento de los países más ricos han creado desequilibrios comerciales crecientes. Junto con la desregulación de los mercados financieros, esto ha generado una sucesión de burbujas especulativas. Los bancos de inversión y los fondos «de cobertura» [*hedge funds*] de alto riesgo expandieron aún más el crédito mediante la creación de nuevos tipos de derivados valorados en «precios modelo» que se vendieron a inversores institucionales fuera del mercado regulado [*over the counter*], dando lugar así a un «sistema bancario en la sombra» cuyas operaciones no aparecían en los libros de cuentas [*off-balance-sheet*] y que pronto sobrepasaron con mucho los intercambios formales regulados. La avidez temeraria de los bancos en busca de beneficios a corto plazo dio lugar, durante el crac de 2008, a la mayor destrucción de valor en la historia del mundo. Las medidas de rescate adoptadas por los gobiernos consistieron en ofrecer una liquidez ilimitada al sector financiero, dejando el conjunto del sistema prácticamente intacto.

### *El rescate de Wall Street*

En octubre de 2008 se produjo una aparente afirmación de la autoridad gubernamental sobre los nueve mayores bancos de Estados Unidos. Sus presidentes o directores ejecutivos fueron convocados a Washington por el secretario del Tesoro, «Hank» Paulson\*, quien les informó del riesgo de bancarrota a menos que aceptaran una recapitalización estatal. En menos de una hora todos ellos habían firmado una carta preparada por Paulson en la que ofrecían a las autoridades federales una participación en sus corporaciones a cambio de inyecciones de nuevo capital procedente del recién creado «programa de alivio de activos en dificultades» (*Troubled Asset Relief Programme*, TARP) por valor de 700 millardos de dólares. En aquel momento de extremo peligro todos los bancos aceptaron tolerar ciertas reglas: Goldman Sachs modificó su estatus legal convirtiéndose en

---

\* Director ejecutivo de Goldman Sachs de 1999 a 2006. [N. del T.]

un holding bancario con el fin de obtener fondos del TARP y el gobierno adquirió una participación mayoritaria en Citibank, el mayor banco de Wall Street; AIG, la mayor compañía de seguros del mundo, cedió el 80 por 100 de sus activos a la Reserva Federal por 85 millardos de dólares con los que afrontar su pasivo y el gobierno federal también intervino Fannie Mae y Freddie Mac, las dos mayores compañías hipotecarias. El gobierno británico, por su parte, se había visto obligado a rescatar primero el Northern Rock y luego el Grupo Bancario Lloyds y el Royal Bank of Scotland. Barclays y HSBC hicieron cuanto pudieron para evitar verse implicados en las operaciones de rescate, pero se vieron obligados a aceptar la ayuda del TARP estadounidense.

Pero el Tesoro estadounidense no aprovechó en aquel momento su posición como propietario y acreedor para imponer a las compañías financieras a las que había salvado pautas de crédito que beneficiaran a la economía en general. Según un análisis, la proporción entre contenido jurídico y verborrea en la ley Dodd-Frank, firmada a bombo y platillo por Obama en julio de 2010, era de 13 a 87<sup>1</sup>. Por extraño que parezca, tanto Wall Street como la City de Londres salieron esencialmente indemnes de los intentos de los legisladores de embridarlas; bancos «demasiado grandes para dejarlos caer», bonificaciones insultantes, incentivos perversos, exigua capitalización, reglas contables oscuras, operaciones no reflejadas en los balances y entidades de propósito especial siguieron intactos. Los bancos rescatados se negaron a reanudar las operaciones normales de crédito a las pequeñas y medias empresas, prolongando así la «contracción del crédito». El Tesoro y la Reserva Federal no ocultaban su preocupación pero no impusieron ningún mandato. Los bancos, cada uno de ellos muy consciente de los problemas de los demás –todavía estaban ocultando enormes pérdidas no reconocidas– también rehuían los préstamos interbancarios. Todos ellos habían invertido en múltiples activos muy dudosos, no solamente en las hipotecas *subprime* y otros derivados de crédito, sino también en bonos de deuda pública y empresarial muy lábiles, como los emitidos por los miembros más débiles de la eurozona.

Sólo la aterradora perspectiva del colapso del sistema financiero estadounidense –una «experiencia cercana a la muerte»– había permitido un uso tan extraordinario del erario público. El Congreso se había mostrado renuente a aprobar el TARP –la Ley de Estabilización de Emergencia por la que se creó fue rechazada en su primera votación en septiembre de 2008– y solo lo hizo cuando la legislación había sido enmendada con cálidas palabras sobre las restricciones que aplicaría a los bancos y la ayuda que se extendería a las familias amenazadas de desahucio. Pero como indicó el «inspector general» Neil Barofsky en su balance del programa, fue bien poca la ayuda que se ofreció realmente a estas últimas, cuyos problemas estaban después de todo en la raíz de la crisis de las hipotecas-basura:

---

<sup>1</sup> Nomi Prins, *It Takes a Pillage*, Nueva York, 2011, p. xi.

El Tesoro proporcionó dinero a los bancos sin un plan o esfuerzo efectivo para obligar a la expansión del crédito. No había previsiones acordadas, ninguna exigencia ni siquiera incentivos para incrementar los créditos hipotecarios a quienes pretendían comprar una vivienda, y a pesar de nuestra enérgica recomendación, ni siquiera una petición de que los bancos informaran de cómo usaban los fondos TARP [...] en febrero de 2009] se anunció el Programa de Modificación de la Adquisición de Viviendas con la promesa de ayudar a cuatro millones de familias con modificaciones en su hipoteca. Ese programa ha sido un fracaso colosal, con muchas menos modificaciones permanentes (540.000) que las que se han rechazado o han sido canceladas (más de 800.000) [...] Mientras el programa se debatía por mantenerse a flote, los desahucios seguían aumentando, previéndose que afectarían a entre 8 y 13 millones de expedientes durante la vida del programa<sup>2</sup>.

Si una parte mayor de los fondos TARP se hubiera dedicado a perdonar la deuda de trabajadores con bajos salarios, podría haber estimulado el consumo en una economía amenazada por el estancamiento y aligerado la carga de la deuda dudosa y fallida. En cambio, la mejor descripción de la notable obstinación de las prácticas básicas del sector financiero durante los años 2008-2011 quizá vendría dada por el adagio *plus ça change, plus c'est la même chose* [Cuanto más cambia, más se parece al original]. Pese a todas las quiebras y rescates, el nivel general de deuda en el conjunto de la OCDE (deuda pública, deuda de las empresas no financieras, deuda de los bancos y deuda de las familias) permaneció tozudamente alto, entre 3 y 5 veces el valor del PIB<sup>3</sup>. La transferencia de la deuda de los bancos al Estado no resolvió ni resolverá el problema mientras el gobierno no dedique buena parte del PIB a un gran programa contra-cíclico y a una política industrial de amplio alcance.

El estímulo fiscal estadounidense era, por otra parte, proporcionalmente mucho menor que el emprendido en el Reino Unido, la Europa continental y China<sup>4</sup>. La recuperación iniciada en 2010 perdió pronto fuelle y parecía acechar un regreso a la «estanflación». La tasa de desempleo oficial en Estados Unidos llegó al 9 por 100, pero el número de los que buscaban trabajo era de 25 millones de desempleados, más cercano a la sexta parte de la mano de obra total. La mayoría de los trabajadores vieron que el valor de sus ahorros había disminuido drásticamente y, como he señalado antes, millones de ellos estaban amenazados de desahucio y ante la perspectiva de la pobreza tras la jubilación. Los bancos británicos recibieron un rescate particularmente generoso, aun estando más comprometidos por la deuda tóxica que Wall Street; pero esa generosidad no les indujo

<sup>2</sup> Neil Barofsky, «Where the Bailout Went Wrong», *New York Times*, 30 de marzo de 2011.

<sup>3</sup> Stephen Cecchetti *et al.*, «The Real Effects of Debt», *BIS Working Paper* 352, septiembre de 2011, p. 7, Tabla 1. Sobre la dinámica de los «ciclos históricos» de la deuda, véase Elmar Altvater, *The Future of the Market*, Londres, 1993, pp. 87-177.

<sup>4</sup> El estímulo fiscal del gobierno de Obama fue convincentemente criticado en su momento por Paul Krugman y Joseph Stiglitz, tanto por su pequeño tamaño como por su gran dependencia de las reducciones de impuestos.

a atender las modestas necesidades de crédito de las pequeñas y medias empresas. Un estudio atestiguó que los créditos aprobados habían caído del 90 al 65 por 100, pese al hecho de que hubiera muchas menos peticiones debido a las estrictas condiciones de contratación<sup>5</sup>.

El escaso efecto de los paquetes de estímulos hizo necesaria una masiva «flexibilización cuantitativa» (FC), esto es, la impresión de dinero para comprar los activos de los bancos. La FC emprendida por los bancos centrales estadounidense y británico sirvió para apuntalar los activos y beneficios del sector financiero pero tuvo efectos muy débiles sobre la demanda efectiva y no consiguió alentar la inversión en la economía «real». La Reserva Federal estadounidense reveló en diciembre de 2010 que su programa FC había comprado títulos por valor de 3,3 billones de dólares a los bancos estadounidenses, utilizando el dinero recién impreso para pagar y sostener espectacularmente la liquidez de los bancos. Estos utilizaron esa ayuda para reducir su propio endeudamiento; de hecho podían invertir, sin apenas riesgo, en títulos de la deuda pública o en deuda privada de alta calidad. Para hacerse una idea de lo que significaban esos 3,3 billones de dólares, cabe observar que es casi el quíntuplo del TARP, que no era más que la punta visible del rescate bancario<sup>6</sup>. El dinero barato prestado a los bancos les permitió endeudarse con tipos ultrarreducidos –1 por 100 o menos– y a continuación colocar el dinero en títulos de la deuda pública por los que obtenían un interés del 4 o 5 por 100, o prestar a consumidores o empresas privadas de los que obtenían entre el 12 y el 18 por 100. No es, pues, sorprendente que los grandes bancos volvieran pronto a ufanarse de enormes beneficios y que las bonificaciones de los banqueros se inflaran de nuevo. Pero pronto las autoridades financieras de Brasil y China se quejaron de que la «flexibilización cuantitativa» en Estados Unidos y en Europa estaba exportando la inflación y fomentando nuevas burbujas de la propiedad inmobiliaria en las economías emergentes.

Pasado un tiempo, esas sumas se recuperarán arrebatándose las a los principales programas sociales. En 2010 Obama nombró a una comisión bipartita para elaborar propuestas de reducción del déficit público. Algunos de sus miembros sugirieron un drástico recorte en las prestaciones de la seguridad social elevando la edad de jubilación, relajando la indexación de los salarios y pensiones al IPC y mediante otras medidas. En julio de 2011 Obama ofreció una «gran negociación» a los líderes republicanos del Congreso, por la que acordarían elevar el límite de la deuda pública estadounidense a cambio de 4 billones de dólares de ahorro, en particular mediante reducciones del gasto público que incluirían a la seguridad social<sup>7</sup>. Aunque los republicanos rechazaron esa oferta tentadora, los

---

<sup>5</sup> Katie Allen, «Banks accused of failing small firms after lending plunges», *The Guardian*, 29 de octubre de 2011.

<sup>6</sup> Gillian Tett, «Lessons in a \$3,300 billion surprise from the Fed», *Financial Times*, 3 de diciembre de 2010.

<sup>7</sup> Jackie Calmes, «Obama Grasping Centrist Banner in Debt Impasse», *New York Times*, 12 de julio de 2011; Clive Crook, «Obama's failed debt ceiling gamble», *Financial Times*, 11 de julio de 2011.

recortes de la seguridad social ya no quedaban descartados por la Casa Blanca. El acuerdo que se logró finalmente en agosto de 2011 comprometía al Congreso a reducir el presupuesto federal en 2,4 billones de dólares en diez años, pero confiaba la tarea de especificar esos recortes a un supercomité que en noviembre confesó su incapacidad para llegar a ninguna conclusión. Aquella fue la señal para que comenzara un nuevo regateo. La seguridad social y Medicare, el programa de salud para los ancianos, son candidatos para la carnicería. Aunque se muestran renuentes a admitirlo, bastantes demócratas creen posible «salvar» esos programas reduciendo las prestaciones para hacer posible el trato, pese a la dureza del enfrentamiento fraccional.

### *Desaciertos en la eurozona*

En Europa, entre tanto, los bancos que también habían incurrido en créditos insensatos se vieron duramente golpeados. En 2009-2010 se requirieron rescates a gran escala en Islandia, Grecia, Irlanda y Portugal, con dobles dosis y resultados inciertos. En 2011 Italia y España parecían esperar su turno. De nuevo los bancos habían prestado imprudentemente pero esperaban escapar a todas las consecuencias negativas. Sin embargo, la eurozona se demostró vulnerable, sobre todo porque la moneda no estaba apoyada por una autoridad presupuestaria unificada. El Banco Central Europeo no tenía la capacidad de actuar como «prestamista de último recurso». El gobierno de Merkel no estaba dispuesto a permitir que imprimiera billones de euros para destinarlos a la «flexibilización cuantitativa» como habían hecho los bancos centrales estadounidense y británico, lo que reflejaba cierta combinación de fobia históricamente enraizada a la deuda y la inflación, tácticas correosas de negociación y gran desconfianza de los bancos. Los rescates requirieron largas negociaciones entre las diversas autoridades financieras nacionales, cada una de las cuales tenía intereses especiales que defender, especialmente cuando sus propios bancos afrontaban una quiebra o «corte de pelo». Los rescates impulsieron programas drásticos de austeridad a los gobiernos rescatados, desmantelando las pensiones y reduciendo el nivel de vida mientras que permitían que se aliviara casi en su totalidad el pasivo tóxico de los bancos. Los intentos de ampliar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) durante el verano de 2011 no calmaron durante mucho tiempo los temores —pese a los compromisos de los gobiernos nacionales por un total de 440 millardos de euros, de los que 211 millardos provenían de Alemania— porque era a la vez engorroso e inadecuado<sup>8</sup>. Cada gobierno nacional tenía que respaldar el plan y cuando quedó claro en octubre que Grecia absorbería la mayor parte del Fondo, sin dejar nada para Italia con su deuda de 1,9 millones de euros, la respuesta fue no aportar más recursos al FEEF sino recurrir en su lugar a una ingeniería financiera del estilo de

---

<sup>8</sup> Quentin Peel, «Germany and the eurozone: Besieged in Berlin», *Financial Times*, 26 de septiembre de 2011.

las CDOs, de forma que su base en dinero efectivo sería utilizada para asegurar créditos que totalizaban alrededor de 1 billón de euros.

Las instituciones financieras europeas se han demostrado incapaces desde cualquier punto de vista. Muchos de los titanes financieros de la eurozona –en particular el Deutsche Bank y la Société Générale– participaron en la orgía de derivados de crédito y todavía no han admitido toda su exposición, ya sea a los derivados de crédito estadounidenses o a los bonos de la eurozona. La plétora de permutas de incumplimiento crediticio [*credit default swaps* o CDS] en los mercados de deuda soberana hacía más difícil abordar la reproducción del problema de la deuda griega en 2011.

Mientras se ahondaba la crisis, los dirigentes de la eurozona propusieron en julio de 2011 la financiación de un nuevo rescate griego mediante una cuota de los bancos. Tal impuesto no contaría como una suspensión o quiebra y no motivaría por tanto pagos a los poseedores de permutas de incumplimiento crediticio sobre los bonos griegos. Un informe comentaba: «El plan, cuyos defensores creen que puede recaudar 30 millardos de euros en tres años, podría contribuir a satisfacer las demandas alemanas y neerlandesas de que los tenedores privados de bonos griegos contribuyan a un nuevo rescate de 115 millardos de euros»<sup>9</sup> (esos «tenedores privados» eran por supuesto bancos). Sin embargo, la resistencia de los bancos bastó para bloquear la propuesta, pese a la gravedad de la situación y a la modestia de la cuota propuesta. Los bancos aceptaron únicamente una reducción de 17 millardos de euros en sus activos en bonos, que consideraban preferible a una cuota del 0,025 por 100 de sus activos en toda la eurozona porque podía ser el principio de algo peor. El gobierno británico estaba dispuesto a permitir una cuota muy modesta de sus bancos (aunque comparativamente están bien capitalizados), pero se esforzó con denuedo por bloquear un diminuto Impuesto sobre las Transacciones Financieras propuesto por franceses y alemanes como un gesto hacia la opinión pública (la City y los fondos de cobertura consideran ese impuesto una amenaza indeseable).

Los jefes de gobierno de la eurozona tramaron finalmente un plan a finales de octubre de 2011 por el que los propietarios privados de deuda griega aceptarían una rebaja «voluntaria» del 50 por 100. Esto fue un trauma para los inversores institucionales, compañías de seguros y fondos de pensiones, que habían adquirido bonos denominados en euros cubiertos por seguros CDS como activos «libre de riesgos», de conformidad con el mandato de sus clientes. Aunque algunos estaban asegurados contra una rebaja parcial, la mayoría no lo estaban. Según un informe del *Financial Times*, los términos de la rebaja se habían elegido cuidadosamente para evitar desencadenar una compensación, enfureciendo a los inversores que contaban, en caso de suspensión de pagos, con recibir sus seguros

---

<sup>9</sup> Peter Spiegel, Quentin Peel y James Wilson, «Move to tax banks seen as key in Greece plan», *Financial Times*, 20 de julio de 2011.



CDS. El resultado iba a arrojar dudas sobre la totalidad del mercado de los CDS soberanos:

No está claro hasta qué punto los bancos de la eurozona han utilizado CDSs para cubrir su exposición a la deuda de la propia eurozona. Sin embargo, el nivel publicado de CDS soberanos pendientes para Italia y Francia es de más de 40 millardos de dólares, y el Banco de Pagos Internacionales sugirió recientemente que los bancos estadounidenses han extendido a sus socios de la eurozona una protección superior a 500 millardos de dólares en deuda soberana y empresarial italiana, francesa, irlandesa, griega y portuguesa<sup>10</sup>.

Los inversores internacionales necesitan una proporción de activos «libre de riesgos» para equilibrar sus carteras: ¿podrían ahora calificar honradamente como «libres de riesgo» los bonos italianos, españoles o incluso franceses? Muchos apuntaban a que sólo un «prestamista de último recurso» adecuado, respaldado por una economía y un sistema impositivo firmes podría ofrecer el núcleo libre de riesgos requerido por un sistema financiero fiable<sup>11</sup>. A finales de 2011 el gobierno alemán parecía finalmente dispuesto a respaldar tal enfoque, pero sólo a cambio de establecer una autocracia fiscal con una argolla de hierro sobre toda la eurozona.

### *Congojas de las pensiones*

En la vorágine de la Crisis 2.0, los pensionistas se están viendo golpeados por todas partes. En 2008 los fondos de jubilación globales cayeron un 20 por 100 en una semana. En Estados Unidos una investigación reciente halló que el 67 por 100 de los adultos entre 45 y 54 años tenían menos de 50.000 dólares de ahorros, con los que solo podrían contratar una pensión de 300 dólares al mes; ese porcentaje era del 55 por 100 en 2007<sup>12</sup>. Después de más de medio siglo de alabar los incentivos fiscales a los planes de pensión privados —401(k)s, IRAs, planes ocupacionales y cosas parecidas—, es todavía la seguridad social, con un promedio de 1.100 dólares al mes, la que salva a casi la mitad de la población anciana estadounidense de la pobreza. Incluso en los mejores tiempos, los planes de Contribución Definida (DC) se vieron erosionados por la «enfermedad del coste» de la

<sup>10</sup> Gillian Tett, «Greek bond losses put role of sovereign cds in doubt», *Financial Times*, 18 de noviembre de 2011.

<sup>11</sup> Como decía otro comentarista del *Financial Times*: «Difícilmente se puede exagerar la importancia de la disponibilidad de activos libres de riesgos en un sistema financiero moderno. Cada compañía de seguros y cada fondo de pensiones necesita invertir parte de sus ingresos en tales activos. Debido a una combinación de miopía y analfabetismo financiero, el Consejo europeo se halla ahora en una situación en la que necesita desesperadamente eurobonos, aunque solo sea para asegurar la existencia de un sector financiero funcionamiento». Véase Wolfgang Münchau, «The only way to save the eurozone from collapse», *Financial Times*, 14 de noviembre de 2011.

<sup>12</sup> Employee Benefits Retirement Institute, *2011 Retirement Confidence Survey*, y para 2007, George Magnus, *The Age of Aging*, Londres, 2009, p. 87. La cifra de 50.000 dólares excluye la vivienda que habitan y la pertenencia a planes de pensiones de beneficio definido, que están desapareciendo rápidamente.

cara publicidad y los gastos de administración y personalización (la administración de la seguridad social atiende a más de 150 millones de adscritos y 50 millones de beneficiarios con un personal de 68.000 empleados, el tamaño de un gran banco de inversiones).

Mientras tanto los fondos de pensiones de prestaciones definidas (DB) sufrieron una alucinante montaña rusa de alzas y desplomes arrastrados por las euforias y caídas del mercado de valores inducidas por la «flexibilización cuantitativa», incluso antes de la crisis de los títulos de deuda soberana. A finales de septiembre de 2011, Mercer, uno de los principales consultores de pensiones, estimaba el déficit de los planes DB privados y empresariales estadounidenses en 512 millardos de dólares, cerca del nivel que alcanzó a principios de 2009, cuando los mercados de valores andaban todavía dando tumbos. Por su parte, el Fondo de Protección de Pensiones británico (PPF) estimaba el déficit de los planes empresariales a su cargo en 196 millardos de libras. Un informe de *The Economist* que citaba esas cifras también estimaba que el déficit en los planes públicos estadounidenses había aumentado en 1,3 billones de dólares durante los dos años anteriores, y apuntaba que la «flexibilización cuantitativa» estaba agravando los problemas que afrontaban esos fondos, ya que cualquier reducción de su rendimiento eleva la estimación contable del coste de cumplir las futuras obligaciones a sus beneficiarios<sup>13</sup>.

Además, los principios operativos de la financiación de las pensiones DB tienen un desgraciado impacto «pro-cíclico»: ante un déficit inducido por la recesión, los patrocinadores empresariales del fondo están obligados a introducir más dinero en el plan, de forma que en un momento de demanda débil las empresas se ven obligadas a ahorrar y no a invertir, lo que solo puede deprimir la demanda. Cuando las cotizaciones de bolsa volvieron a caer a partir de agosto de 2011, algunos planes se vieron tan atrapados en el déficit que amenazaron la propia existencia de sus patrocinadores, lo que tendría funestas consecuencias para sus miembros y beneficiarios. La Corporación de Garantía de Prestaciones y Pensiones (PBGC) y el PPF británico siguen el rendimiento de los planes y ofrecen seguros a los miembros de los planes cuyos patrocinadores empresariales quiebran. Sin embargo, los seguros solo garantizan alrededor del 70 por 100 de la cantidad prometida. En Estados Unidos las principales corporaciones en toda una serie de sectores –líneas aéreas, acero, automóviles, piezas de repuesto– se han acogido al capítulo 11 de protección frente a la bancarrota, lo que permite a los rescatadores empresariales (conocidos también como «buitres capitalistas») como Wilbur Ross denegar sus responsabilidades en cuanto a las pensiones, pasándoselas al PBGC<sup>14</sup>. Los datos cada vez más decaídos de los ahorros estadounidenses y las perspectivas de jubilación muestran una vez más la vaciedad del «éxito» de Washington en cuanto a vencer la crisis.

<sup>13</sup> «A trillion here, \$500 billion there», *The Economist*, 15 de octubre de 2011.

<sup>14</sup> Analizo esto en «The Subprime Crisis», *NLR* 50, marzo-abril [ed. cast., mayo-junio] de 2008.

Entre tanto la reorientación de muchos gobiernos, que pasaron de promover los planes públicos de pensiones a los depósitos privados obligatorios, se ha demostrado en general un desastre para los países afectados. Los altibajos en los mercados de valores han supuesto que los objetivos de acumulación prometidos no se han alcanzado ni de lejos. Hasta vísperas de la crisis, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovían agresivamente la comercialización de los fondos de pensiones, como ha mostrado Mitchell Orenstein en *Privatizing Pensions*<sup>15</sup>. Entre 1994 y 2008 treinta y seis países de Latinoamérica y Europa oriental fueron presionados para que abandonaran sus sistemas públicos de pensiones y los sustituyeran por fondos de pensiones personales gestionados por instituciones financieras comerciales. Las agencias internacionales recurrieron a una presión desvergonzada y a lo que Orenstein llama «apalancamiento de recursos»: a unos países que atravesaban una difícil transición a la democracia se les negaba todo tipo de ayuda financiera a menos que acordaran la privatización de las pensiones. Además el Banco Mundial puso fondos a su disposición para la realización de campañas de persuasión pública, mientras se ofrecían incentivos y empleos atractivos a personajes clave si se mostraban de acuerdo con el proceso.

En 2008 los fondos de pensiones recién creados en Polonia perdieron el 17 por 100 de su valor, en Bulgaria el 26 por 100, en Eslovaquia el 12 por 100 y en Estonia su valor cayó el 32 por 100 en un fondo, el 24 por 100 en otro y el 8 por 100 en otro<sup>16</sup>. La crisis financiera hizo a los gobiernos defraudar tanto a los pensionistas como a los trabajadores: mientras que los primeros recibían pensiones devaluadas, los últimos quedaron consternados por la inseguridad de sus ahorros. La privatización de las pensiones ha sido costosa para los Estados implicados debido al «problema de la transición»; los gobiernos tenían que pagar algún tipo de pensiones de jubilación a todos aquellos que habían pertenecido al sistema público, asegurando al mismo tiempo que las contribuciones de los actuales empleados se invirtieran en los nuevos fondos de pensiones. La única forma factible de hacerlo era emitiendo un empréstito, pero eso aumentaría la deuda pública y las reglas del Eurostat no permiten que eso se compense por balances positivos en los fondos de pensiones privadas. Bruselas, que no había barruntado el peligro de los bonos griegos, estaba sin embargo muy atento a la transparencia total de los «créditos de transición» requeridos por la privatización de las pensiones.

Como sugerían las sucesivas oleadas de crisis, el método de coordinar una economía mediante el mercado de valores está plagado de inestabilidad y

<sup>15</sup> Mitchell Orenstein, *Privatizing Pensions: The Transnational Campaign for Social Security Reform*, Princeton, 2008. Véase también Camila Arza, «The Limits of Pension Privatization: Lessons from Argentine Experience», *World Development*, vol. 36, núm. 12, 2008. Varios países que habían adoptado el sistema de pensiones privadas, entre ellos Chile, Hungría y Argentina, revisaron luego sus sistemas de jubilación para dar mayor importancia al «pilar público» de las pensiones estatales.

<sup>16</sup> Dariusz Stanko, «Pension Fund Returns: The Case of Central and Eastern Europe», en FIAP, *Investments and Payouts in Funded Pension Systems*, Santiago de Chile, 2009.

riesgo sistémico. Las finanzas de cualquier tipo deben contar con la posibilidad de resultados adversos, pero el «libre mercado» exagera lo que es un problema inevitable y permite a los bancos chantajear a las autoridades políticas. Se sabe que los megabancos son peligrosos, pero los gobiernos occidentales siguen perdonándolos y amparándolos frente a las pérdidas. La cuestión empeora aún más cuando las entidades financieras son no solo «demasiado grandes para dejarlas caer» sino también «demasiado grandes para salvarlas», como puede ser el caso de varios bancos europeos. Los grupos de presión del sector financiero se infiltran en los gobiernos, financian a las fracciones políticas dominantes y mantienen sustanciales «laboratorios de ideas». Aplicar nuevas dosis de la misma medicina que debilitó al paciente no hace más que prolongar sus problemas actuales.

## II. DIAGNÓSTICOS Y REMEDIOS

Las respuestas predominantes en el terreno de la economía política parecen basarse en la suposición de que la recuperación requiere poco más que el desapalancamiento tras el reventón de la burbuja inmobiliaria y alentar el crecimiento tras un declive del ciclo de negocios. Pero como he sugerido antes, las actuales tribulaciones de las principales economías son el resultado de profundos desequilibrios en el sistema global. Enmascarada por el enorme crecimiento del sector financiero durante las últimas décadas, se ha producido una pérdida colosal de la competitividad industrial estadounidense. En 1998 Robert Brenner argumentaba en «La economía de la turbulencia global» que el creciente exceso de capacidad global en la industria daría lugar inevitablemente a una importante contracción en las economías de la OCDE<sup>17</sup>. Durante la era neoliberal, los gobiernos occidentales hicieron cuanto pudieron por restaurar la rentabilidad [tasa de ganancia] y mantener la ilusión de un crecimiento sin fin. Las condiciones relajadas del crédito alentaban a las familias, empresas y gobiernos locales a contraer enormes deudas. Las familias estadounidenses recurrieron al crédito –incluyendo cerca de un billón de dólares de «créditos a los hogares» (segundas hipotecas). El sistema basado en el dólar instituido a partir de 1973 permitía una dosis muy ampliada de creación de crédito. Como advirtió el economista francés Jacques Rueff, el régimen del dólar propició un sistema internacional de balanza de pagos que funciona como un juego de canicas en el que, después de cada ronda, «los ganadores devuelven sus canicas a los perdedores», cuando los acreedores de Washington invierten los dólares que reciben por mercancías vendidas en Estados Unidos en instrumentos denominados en dólares con el fin de mantener competitivas sus propias monedas, mientras que Estados Unidos puede simplemente imprimir más dólares para pagar sus facturas<sup>18</sup>. En décadas sucesivas alemanes, japoneses y chinos aprendieron esta

<sup>17</sup> Robert Brenner, «The Economics of Global Turbulence», *NLR* 1/229, mayo-junio de 1998, publicado posteriormente en forma de libro con un epílogo en 2006 [ed. cast.: *La Economía de la Turbulencia Global*, Akal, Cuestiones de Antagonismo 54, 2009].

<sup>18</sup> Citado en Richard Duncan, *The Dollar Crisis*, Chichester, 2003, p. 43.

lección, cuyo efecto era estimular la creación de crédito y enmascarar el debilitamiento de la economía estadounidense.

El ascenso sin precedentes de China y otros productores asiáticos desde 1992 ha traído un enorme incremento de la capacidad productiva y un diluvio de dólares que hinchaba (hasta 2008) el superávit de la balanza de capitales estadounidense, pero que incrementaba mucho menos, proporcionalmente, la demanda agregada global. El ascenso de los productores asiáticos podría haber sido una buena noticia para todos si sus trabajadores-consumidores hubieran estado mejor pagados; pero los salarios reales sufrían una presión a la baja en los países emergentes y en desarrollo, con la consiguiente debilidad de la demanda, lo que Prabhat Patnaik entiende como una «crisis de realización» clásica a escala global<sup>19</sup>. Durante los años de gran expansión de finales de la década de 1990, China contribuyó a mantener la gigantesca expansión del crédito invirtiendo su superávit en bonos del Tesoro estadounidense<sup>20</sup>. La escasa demanda resultante del estancamiento de los salarios en Occidente y de salarios mucho más bajos en Oriente se pudo compensar durante un tiempo mediante diversas formas de aumentar la deuda de las familias estadounidenses, como las facilidades en la concesión de hipotecas, tarjetas de crédito y créditos para la renovación del parque automovilístico. Los consumidores europeos se unieron a la fiesta al iniciarse el nuevo milenio y sus gobiernos se mostraban agradecidos por los créditos baratos. Los inversores institucionales –incluidos los fondos de pensiones y las compañías de seguros– contribuyeron a crear un sistema financiero opaco que era presa fácil de las burbujas de activos, «bancos en la sombra» no regulados y una proliferación de la «financiarización»<sup>21</sup>. Entre 2000 y 2007 muchos fondos de pensiones se convirtieron en fondos de alto riesgo para aumentar su tasa de beneficio, permitiéndose el riesgo subyacente porque habían almacenado decenas de millardos en bonos «libres de riesgo» de la eurozona.

Pero el crédito fácil que inundaba Estados Unidos y Europa se había despegado de los fundamentos económicos. La creciente desigualdad en China bloqueó el tipo de crecimiento equilibrado que se dio en la Europa de posguerra. Los trabajadores o campesinos chinos no ganaban lo suficiente para convertirse en buenos consumidores de productos extranjeros, mientras que en Estados Unidos los prestatarios mal pagados o pobres contraían demasiadas deudas, especialmente en el mercado de la vivienda, cuya amortización pronto les resultaría imposible. La morosidad

<sup>19</sup> Prabhat Patnaik, *Re-Envisioning Socialism*, Nueva Delhi, 2011. Patnaik insiste en el papel de la pobreza global en la precipitación y configuración de la crisis: pp. 148-164, 259-271.

<sup>20</sup> Andrew Glyn, «Imbalances in the World Economy», *NLR* 34, julio-agosto [en cast., septiembre-octubre] de 2005. Véase también Maurice Obstfeld y Kenneth Rogoff, «Global Imbalances and the Financial Crisis: Products of Common Causes», artículo presentado en la conferencia del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Santa Bárbara, 18-20 de octubre de 2009.

<sup>21</sup> Desarrollé este tema en *Age Shock: How Finance is Failing Us*, Londres y Nueva York, 2006. En 2012 aparecerá una edición revisada como libro de bolsillo.

o incobrabilidad de las hipotecas «subprime» no solo contribuyó a fomentar la crisis de 2007, sino que permanece tozudamente desde entonces en el centro de las turbulencias<sup>22</sup>. En último término, el mejor modo de abordar los desequilibrios fundamentales que produjeron la crisis sería reducir la pobreza global. Si los bajos salarios y la pobreza retraen el consumo y perpetúan la recesión global, hay que encontrar en las raíces de la economía global la forma de restaurar la demanda.

### *¿«La vía hacia adelante»?*

Mientras Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de la eurozona afrontaban ahora una nueva recesión, a la que se añadía la amenaza de nuevas crisis bancarias y de la deuda soberana, desde dentro de las filas de la economía predominante comienzan a oírse voces disidentes. En un artículo de octubre de 2011, «La vía hacia adelante», Daniel Alpert, Robert Hockett y Nouriel Roubini señalaban que rondas sucesivas de intervenciones monetarias y fiscales por parte de la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense no habían conseguido generar una recuperación sostenible y afirmaban que solo tendrían alguna esperanza de éxito medidas más radicales: «Las actuales condiciones económicas exigen un programa de recuperación muy diferente de los propuestos o intentados hasta ahora: más sostenido, más sustancial, más concentrado y más estratégicamente destinado a crear nuevas fuentes de riqueza»<sup>23</sup>. Como Glyn y Brenner, identificaban la raíz de las burbujas de activos en excesos prolongados de la capacidad global y enormes desequilibrios comerciales, y argumentaban que la pobreza y la desigualdad –entre los diversos países y dentro de cada uno de ellos– desempeñaban un papel significativo, tanto en el desencadenamiento de la crisis como en el bloqueo de la recuperación.

Roubini y sus coautores estimaban que la enormidad de la deuda financiera y de las familias en Estados Unidos, «ocasionada por nuestra peor burbuja inflada por el crédito desde finales de la década de 1920», podía tardar entre cinco y siete años en desinflarse y que durante ese periodo causaría grandes perjuicios. Más preocupante aún es que la crisis sea el

<sup>22</sup> Véase Graham Turner, *The Credit Crunch*, Londres, 2008. La compra de una vivienda es una de los mayores transacciones financieras que realiza el ciudadano de un país desarrollado en toda su vida (adquirir una pensión es quizá la única inversión comparable), y eso explica por qué las hipotecas son un negocio tan atractivo. En 2007 la deuda de las familias estadounidenses rondaba el 120 por 100 del PIB y las hipotecas, incluidas las segundas hipotecas, totalizaban cuatro quintas partes del total. Aunque en las familias estadounidenses saldaron parte de sus deudas entre 2007 y 2011, el 15 por 100 de caída del precio de la vivienda –y el aumento del desempleo hasta el 9 por 100– ha significado pérdidas por los inversores y desahucios para los hipotecados (de los que hablaré más adelante). Sobre el papel de la pobreza como generador de la crisis véase Raghuram Rajan, *Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy*, Princeton, 2010.

<sup>23</sup> Daniel Alpert, Robert Hockett y Nouriel Roubini, «The Way Forward: Moving from the Post-Bubble, Post-Bust Economy to Renewed Growth and Competitiveness», *New America Foundation*, octubre de 2011, p. 14.

resultado de cambios colosales en la economía mundial. La entrada de sucesivas oleadas de nuevas economías orientadas hacia las exportaciones, sobre todo la china a principios del nuevo milenio, ha desplazado decisivamente el equilibrio de la oferta y la demanda global:

En consecuencia, la economía mundial se ve agobiada ahora por un exceso de oferta de mano de obra, capital y capacidad productiva con respecto a la demanda global, que merma considerablemente las perspectivas de inversión y de aumentar las exportaciones netas del mundo desarrollado, que son los dos únicos impulsores de la recuperación cuando la deflación de la deuda debilita la demanda de consumo interna. También amenaza al conjunto de la economía global, debido al papel central que la estadounidense todavía desempeña como consumidor y prestatario de último recurso para el mundo entero.

Además, la incorporación de la descomunal mano de obra china con bajos salarios ha desplazado aún más el equilibrio de poder entre trabajo y capital en el mundo desarrollado, dando lugar «no solo al estancamiento de los salarios en Estados Unidos, sino también a niveles de desigualdad de los ingresos y la riqueza inauditos desde la década de 1920, justo antes de la Gran Depresión»<sup>24</sup>. Como respuesta, «la vía hacia adelante» propone un plan en tres partes que comprende:

1. Un plan quinquenal de 1,2 billones de dólares de inversión infraestructural en Estados Unidos, a fin de aprovechar esta «oportunidad históricamente única» para poner a trabajar la mano de obra y el capital ociosos con un «coste extremadamente bajo». El tamaño del esfuerzo sería crítico, ya que débiles «paquetes de estímulos», reducciones de impuestos y «flexibilizaciones cuantitativas» en una época de exceso de capacidad sería como intentar «empujar una cuerda» en lugar de tirar de ella, mientras que vanos intentos de reducir el déficit podrían de hecho acrecentar el déficit general.
2. «Reducción de la exorbitante deuda», ofreciendo alivio a los deudores de bajos ingresos y exigiendo a las instituciones financieras que acepten reestructuraciones de las deudas impagadas.
3. «Reequilibrio global» mediante el aumento de los salarios y el bienestar en los países en desarrollo; mejores dotaciones de seguridad social para los ancianos en China reducirían el excesivo ahorro y alentarían el consumo, con la garantía de activos estatales para ese programa. La rúbrica de «reequilibrio» global también cubre una propuesta para la creación de un «Fondo Mundial de Recuperación Económica», que sería financiado por los países con superávit pero con cambios constitucionales para darles una representación más ecuánime en el Banco Mundial y el FMI.

<sup>24</sup> Alpert, Hockett y Roubini, «The Way Forward...», cit., p. 3.

¿Cómo se deberían valorar esas propuestas? La mejor forma de aumentar los salarios en China sería mejorar los derechos laborales, y no –como dicen esos autores– mediante una revaluación de la moneda china. El renminbi se ha revaluado durante los dos últimos años pero las principales ganancias han correspondido a los compradores más que a los productores. Mejores salarios que vayan directamente a las familias chinas tendrían un efecto más directo en los niveles de consumo. La agitación popular por mejores salarios y protección social es insistente y debería ser satisfecha<sup>25</sup>. Roubini y sus colegas argumentan con razón que una cobertura decente de las pensiones para todos los trabajadores chinos les alentaría a ahorrar menos y gastar más. «La vía hacia adelante» pide el perdón de la deuda y ofrece cierta elaboración técnica sobre cómo llevarlo a cabo de la mejor forma posible, pero sus propuestas son más cicateras que las del inspector general del TARP. «La vía hacia adelante» no cumple realmente su promesa de especificar «nuevas fuentes de crecimiento», limitándose en gran medida a programas de infraestructura y a la creación de un «Fondo Mundial de Recuperación». Tampoco afronta la necesidad de una recapitalización de los bancos patrocinada por el Estado.

### ¿Salario mínimo global?

Richard Duncan presenta un conjunto de propuestas más radicales en *The Corruption of Capitalism*. Duncan había señalado ya el problema de los bajos salarios en *The Dollar Crisis* (2003), que ofrecía una predicción llamativamente precisa de la crisis inminente. Urgía el establecimiento de un salario mínimo global en el sector exportador, que debían exigir tanto las instituciones internacionales como los propios trabajadores<sup>26</sup>, aunque reconocía que sería difícil alcanzar un consenso sobre la necesidad de un aumento de salario modesto pero continuo en los sectores exportadores. Las grandes corporaciones han subcontratado el trabajo en esas áreas o han construido en ellas sus propias instalaciones, porque ven los bajos costes laborales como algo esencial para la rentabilidad. Sin embargo, las diferencias globales de ingresos son ahora tan amplias que un salario mínimo solo elevaría mínimamente los precios para el consumidor final. Si un salario por hora de tres dólares se elevara a cuatro dólares, eso elevaría la demanda local casi un tercio, pero el precio final solo aumentaría entre un 2 y un 3 por 100. La experiencia de los proyectos de «comercio justo» muestra la posibilidad de obtener apoyo para un salario mínimo en el sector exportador. Establecer los servicios de auditoría e inspección necesarios para poner en vigor el salario mínimo global plantearía dificultades, pero Duncan argumenta que no tendrían por qué ser insuperables, especialmente dado el gran interés que los asalariados suelen tener por su paga.

<sup>25</sup> Véase Au Loong-Yu, «Alter-Globo in Hong Kong», *NLR*, 42, noviembre-diciembre de 2006 [ed. cast., enero-febrero de 2007].

<sup>26</sup> Duncan, *The Dollar Crisis*, cit., 2003, pp. 233-250.



Duncan plantea que los salarios en las corporaciones occidentales que dominan el sector exportador pueden ser vigilados más fácilmente que otros salarios o ingresos; de hecho el movimiento de bienes y servicios a través de las fronteras ya está sometido a cierto seguimiento. La argumentación ética contra los salarios muy bajos por largas horas de duro trabajo es bien fácil. A diferencia del proteccionismo comercial tradicional, las nuevas normas propuestas no tratarían de obstaculizar las importaciones procedentes de países de bajos salarios, sino solo de establecer un suelo por debajo del cual no deberían caer los salarios del sector exportador. Estaría destinado a elevar la demanda agregada de un modo que se difundiría por toda la economía. La mayoría de los países de la OCDE ya han establecido cierto tipo de legislación con respecto al salario mínimo, pero no se centran en los salarios y condiciones del sector exportador, como propone Duncan que se haga. El alza de salarios en el sector exportador tendría un primer efecto significativo sobre la demanda agregada en los países de bajos ingresos que ayudaría por sí mismo a impulsar el crecimiento.

Aunque hay puntos de acuerdo entre el análisis y las propuestas de Duncan y las de Roubini y sus colegas en «la vía hacia adelante», Duncan es más específico con respecto a las «nuevas fuentes de riqueza». En su opinión, los bajos tipos de interés y la superabundancia de capital permitirían a las autoridades públicas financiar a bajo coste programas a gran escala en energías renovables, nanotecnología y biotecnología<sup>27</sup>; cada uno de esos programas, si se financiara adecuadamente, requeriría 1,2 billones de dólares, con un total por tanto de 3,6 billones. Duncan explica que las empresas que podrían emprender esos ambiciosos programas no tendrían por qué ser estatales, sino más bien «trusts» públicos. Aunque su enfoque tiene la necesaria amplitud, parece un poco incómodo con el hecho de defender vastas medidas de empresariado público. Ataca los rescates de los bancos y los programas de estímulo como una corrupción del auténtico espíritu del capitalismo, mientras que las medidas que propone alentarían el proceso de acumulación devolviéndole la salud. Sin embargo, si esos «trusts» se financian con fondos públicos, deberían permanecer bajo la gestión pública. Aunque se pueden discutir sus categorías, en la actual coyuntura el capitalismo de Estado puede ser muy preferible a nuevas dosis de austeridad y privatización, siempre que ese empresariado público se vea acompañado por medidas para dar mayor poder a las comunidades y colectivos de trabajadores.

Las propuestas de Duncan conectan con medidas planteadas por Diane Elson y otras economistas feministas, que defienden nuevas políticas comerciales que prohíban el trabajo infantil, la discriminación de género, las prácticas antiecológicas, la denegación de derechos laborales y los salarios muy bajos<sup>28</sup>. Esas autoras argumentan que los desequilibrios comer-

---

<sup>27</sup> Richard Duncan, *The Corruption of Capitalism*, Singapur, 2009, pp. 188-190.

<sup>28</sup> Véase Irene van Staveren, Diane Elson, Caren Grown y Nilufer Cagatay, *The Feminist Economics of Trade*, Londres, 2007.

ciales derivan de ventajas «absolutas» más que «comparativas»; reflejan el desnivel de tecnología y habilidades más que la «competencia perfecta»<sup>29</sup>. En muchas zonas exportadoras la mano de obra está compuesta mayoritariamente por mujeres jóvenes, todavía no cargadas con responsabilidades familiares y con «dedos ágiles», disciplina y aguante para el trabajo duro. Las reglas comerciales podrían establecer salarios mínimos –finalmente, quizá, un «salario vital» *sans frontières*–, así como normas de seguridad, acceso a la formación y derechos laborales para esas trabajadoras. Jean-Luc Gréau, antiguo economista jefe de MEDEF, la federación patronal francesa, ha argumentado parecidamente en favor de reglas comerciales que desalienten la superexplotación de los trabajadores más pobres<sup>30</sup>.

El debate británico sobre eventuales medidas contra la crisis ha dado lugar también a propuestas radicales, aunque ninguna tan general como las mencionadas hasta ahora. Robert Skidelsky apremia a ir más allá de las medidas monetarias y comprometer grandes recursos públicos en un Banco de Inversión Nacional muy activo<sup>31</sup>. Gerald Holtham argumenta que ese banco público podría potenciar el crecimiento y reducir el déficit financiando inversiones que proporcionarían futuras rentas, tales como viviendas sociales o autopistas de peaje<sup>32</sup>; sugiere que alguno de los bancos ya nacionalizados podría adaptarse a esa función, y que contando con el respaldo del gobierno podría obtener dinero sin tener que pagar por él un interés muy alto.

Los fondos de pensiones, debido a su enorme tamaño –suponen aproximadamente una cuarta parte del total de los activos financieros globales–, despiertan en los políticos y financieros propuestas visionarias con el fin de canalizar esas reservas providenciales de dinero en efectivo para recomponer el tejido social en decadencia. Dado que las contribuciones a los planes de jubilación gozan de reducciones en los impuestos, parece justo ponerlas a trabajar hasta que se necesiten para pagar las correspondientes pensiones. Pero ¿cuáles serían los riesgos y la tasa de ganancia? El financiero británico Edmund Truell ha argumentado que los planes de pensiones del sector público serían más asequibles si las contribuciones

---

<sup>29</sup> La tesis de la «ventaja absoluta» ha sido desarrollada por Will Milberg, cuyo enfoque se centra en la insuficiente demanda agregada: véase Will Milberg, «Is absolute advantage passé? Towards a Post-Keynesian/Marxian theory of international trade», en Michael Glick (ed.), *Competition, Technology and Money*, Cheltenham, 1994; Anwar Shaikh demuestra que la adquisición de ventajas competitivas es determinante, y no el resultado de una mítica «competencia perfecta», en «Globalization and the Myth of Free Trade», en Anwar Shaikh (ed.), *Globalization and the Myth of Free Trade*, Londres, 2006.

<sup>30</sup> Véanse Jean-Luc Gréau, *Le Capitalisme, malade de sa finance*, París, 1998, y otras obras examinadas por John Grahl en «Dissident Economics», *NLR* 69, mayo-junio [ed. cast., julio-agosto] de 2011.

<sup>31</sup> Véase Robert Skidelsky y Felix Martin, «Osborne's austerity gamble is fast being found out», *Financial Times*, 1 de agosto de 2011. Skidelsky ha defendido también ese enfoque en artículos publicados en *The New Statesman*.

<sup>32</sup> Gerald Holtham, «A national investment bank can raise our growth», *Financial Times*, 21 de octubre de 2010.

de sus miembros se movilizaran para apuntalar la inversión en infraestructuras. De esa forma el gobierno británico podría matar dos pájaros de un tiro: dispondría de financiación para un programa de obras públicas por 1,3 billones de libras, por un lado, y por otro contrarrestaría la amenaza de déficit en el sector público de las pensiones. Los fondos de pensiones privados disfrutarían de un acceso especial a tales proyectos de construcción emprendidos por el gobierno, que les garantizaría las ganancias aunque el interés ofrecido fuera bajo<sup>33</sup>.

Sin embargo, todo dependería de cómo se establecieran y gestionaran exactamente las nuevas disposiciones relativas a las pensiones del sector público. Ya he señalado que las pensiones comerciales privadas son costosas y precarias. El sector público –tanto el funcionariado como el propio gobierno– dispone de personal y experiencia suficiente para crear una institución que dirigiera esos planes, y eso es lo que debería hacer. Pero no sería equitativo ofrecer esas segundas pensiones patrocinadas por el gobierno únicamente a los trabajadores del sector público y dejar a un lado al resto de los ciudadanos. La defensa claramente justificada de los derechos de sus miembros por los sindicatos del sector público británico no haría más que reforzarse si se realizara una campaña por una segunda pensión universal<sup>34</sup>.

No obstante, sería necesario tener sólidas garantías y claras líneas de orientación. Si los fondos de jubilación invierten en proyectos públicos, su tasa de ganancia debería estar claramente garantizada. Un informe reciente permite columbrar algunos de los peligros:

Cuatro gestores de fondos infraestructurales y de pensiones británicos, que representan fondos por valor de más de 50 millardos de libras, firmaron un acuerdo inicial con el Tesoro para invertir en planes tales como los ferrocarriles, carreteras y fuentes de energía [...] El Tesoro espera establecer así un nuevo modelo de inversión en infraestructuras que sustituya la Iniciativa de Financiación Privada (PFI), muy desacreditada. A principios de este mes comenzó una revisión del modo de recabar financiación privada para tales planes que proporcionaría «mejor valor» [mayor rentabilidad] que la PFI, cuyos costes típicos de capital eran del 8 por 100. El nuevo modelo ofrecería menores rentas pero se espera que se vinculen al Índice de Precios de Consumo de forma que no les afecte apenas la tasa de inflación<sup>35</sup>.

El gobierno británico, tras haberse comprometido con el equilibrio presupuestario, está desesperado por encontrar un mecanismo «fuera del balan-

<sup>33</sup> William Robins, «Radical Plan for Fund to Plug £1.3 trillion Black Hole», *City Wire*, 1 de noviembre de 2011, y *Sunday Times*, 6 de noviembre de 2011. Ese plan podría ser dirigido enteramente por fondos públicos no lucrativos, pero Truell, director de la Corporación de Pensiones, parece preferir que sean los seguros comerciales los que lo gestionen.

<sup>34</sup> Explico qué aspecto podría tener esto en el capítulo 7 de *Age Shock: How Finance is Failing Us*.

<sup>35</sup> George Parker y Jim Pickard, «Fund managers back infrastructure plan», *Financial Times*, 26 de noviembre de 2011.

ce» para financiar inversiones en infraestructuras muy necesitadas. Pero los fondos de pensiones considerarán esas inversiones demasiado arriesgadas a menos que el gobierno esté dispuesto a garantizar tanto el principal como una tasa de interés mínima, y tampoco debería esperarse que afronten el riesgo de un exceso de coste. Sin embargo, si se ofrecen tales garantías habría que hacer cierta provisión de fondos en las cuentas públicas y tras la costosa experiencia de la PFI sería más difícil ofrecer ciertos beneficios a los eventuales socios comerciales del Tesoro. Aunque el canciller británico aceptó ese proyecto, su tamaño era modesto (solo tres millardos de libras al año) y sus detalles todavía no están acordados. La mayoría de los gestores británicos de fondos de pensiones carecen de capacidad o envergadura para emprender proyectos infraestructurales públicos, pero una institución pública les permitiría unir sus recursos a ese fin<sup>36</sup>.

Los fondos y planes de pensiones ofrecen a sus participantes una participación nominal en el orden capitalista aunque en realidad solo ofrecen un suplemento muy modesto a los planes públicos. En los Países Bajos y en algún otro país casi todo el mundo tiene algún plan de pensiones, pero la pauta más común es que aproximadamente la mitad de los trabajadores gocen de alguna cobertura, cuyo valor puede ser no obstante muy desigual. En el Reino Unido y Estados Unidos la mitad de las reducciones de impuestos corresponde al 10 por 100 más rico de los empleados. Sin embargo, las instituciones públicas que se han creado para regular los fondos de pensiones —el PBGC en Estados Unidos y el Fondo de Protección de Pensiones o más recientemente el National Employment Savings Trust (NEST) en el Reino Unido— podrían ser dotados con más recursos y más poderes (véase más adelante).

En el mejor de los casos, las propuestas para invertir en infraestructuras llevan varios meses hasta tener un efecto observable en el empleo. La forma más rápida de alentar la demanda sería reducir los impuestos sobre la renta y el consumo. Tanto en Estados Unidos como en Europa, los impuestos sobre el rendimiento del trabajo (contribuciones a la seguridad social) podrían revisarse o suprimirse totalmente para los trabajadores con bajos salarios y por debajo de los 30 años, elevando el techo por encima del cual hay que pagar esas contribuciones. Tal reconfiguración, si se calibrara adecuadamente, podría de un solo golpe alentar la demanda, reducir el coste de contratar nuevos trabajadores y elevar los impuestos para los grandes ingresos. La adopción de tal cambio por los gobiernos alemanes durante los últimos años ha permitido reducir el desempleo del 9 al 5 por 100, mientras que los salarios de los miembros de IG Metall se elevaron un 13 por 100 en los años 2005-2009<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> En las últimas décadas los bancos han desplegado técnicas de financiarización para dominar la financiación de infraestructuras, a menudo con resultados muy desafortunados. Véase Kate Burgess y Paul Davies, «Pension funds need convincing on infrastructure», *Financial Times*, 29 de noviembre de 2011.

<sup>37</sup> Sobre las prácticas alemanas, véase Brooke Unger, «Europe's Engine», *The Economist*, 13 de marzo de 2010.

### III. AUDITORÍA DE LA DEUDA SOBERANA

La Crisis 2.0 ha supuesto descargar las deudas contraídas por los bancos sobre los jubilados, estudiantes, profesores, cuidadores y desempleados al capitular los gobiernos frente a los tenedores de bonos y agencias de calificación, rescatando íntegramente a algunos prestamistas que no se lo merecían. Reconocer y reducir las pérdidas es una parte esencial del proceso de recuperación, pero es preferible un proceso deliberado y selectivo a una respuesta *ad hoc* a la crisis, incluyendo una auditoría de la deuda pública que condujera a un repudio selectivo eliminando enteramente las «deudas odiosas» (se definen habitualmente como tales las contraídas por un gobierno sin el consentimiento de sus ciudadanos y con objetivos que van contra sus intereses, mientras que los acreedores sí son conscientes de esas condiciones). Una auditoría permite documentar el proceso por el que ha aumentado la deuda e identificar qué acreedores están legitimados para cobrar y cuáles no. En 2007 el presidente ecuatoriano Rafael Correa nombró una comisión para que realizara una auditoría integral del crédito [deuda] público (CAIC), formada por economistas internacionales y expertos legales, a fin de establecer la legitimidad, legalidad y adecuación de las negociaciones y renegociaciones de los créditos ecuatorianos desde 1976; se encontraron numerosas irregularidades e ilegalidades, algunas de las cuales databan de la renegociación establecida por el plan Brady de 1995. El gobierno de Correa, armado con esa auditoría, consiguió rebajar las deudas a los bancos estadounidenses de 3,2 millardos de dólares a menos de 1.000 millones.

Si otros países emprendieran tal investigación podrían descubrir presiones indebidas, el soborno de funcionarios públicos y la corrupción de legisladores (los préstamos «de transición» antes mencionados a los países que privatizaran sus pensiones podrían ser un ejemplo). Podrían también descubrir deudas contraídas en términos tan onerosos que incluso pagándolas varias veces no se saldarían. Del mismo modo que la crisis de las hipotecas basura se vio muy intensificada por las prácticas del «sistema bancario en la sombra», las crisis de deuda soberana que la han seguido se han visto exacerbadas por pasivos ocultos de los gobiernos, especialmente los que disfrutaban de garantías «implícitas». En *Les dettes illégitimes* el economista francés François Chesnais extiende la noción de «deuda odiosa», argumentando que la deuda pública debería ser repudiada como ilegítima si se ha contraído para realizar «donaciones al capital» —por ejemplo, inversión pública en activos de propiedad pública estatal como aliciente para la privatización, o déficit fiscal resultante de bajos niveles de imposición directa, allí donde los ingresos por impuestos se han sustituido deliberadamente por deuda<sup>38</sup>. El venerable principio del «jubileo» consagrado en la Biblia prescribe la cancelación de todas las

<sup>38</sup> François Chesnais, *Les dettes illégitimes: Quand les banques font main basse sur les politiques publiques*, París, 2011, pp. 95-141. Véanse también las recomendaciones de un grupo de economistas de ATTAC en *Le piège de la dette publique*, París, 2011.

deudas cada cincuenta años. Sin embargo, todavía queda margen para la discriminación, ya que a veces los ricos deben dinero a los pobres y son plenamente responsables de haber contraído ciertas deudas. Si Italia repudiara todos sus bonos, eso perjudicaría a muchos pequeños ahorradores, ya que millones de ellos poseen el 14 por 100 del total. Quienes defienden soluciones radicales deben tomar precauciones para no empujar involuntariamente a la pequeña burguesía en brazos de los fascistas (el repudio puede excluir, por supuesto, a esos ahorradores, a los fondos de pensiones genuinos y a las instituciones de caridad).

Debe recordarse que deuda y crédito son dos caras de la misma moneda. El crédito es algo maravilloso si se utiliza para impulsar la economía real, produciendo «bienes» y evitando «males». El lado malo del crédito fácil se vio en las sucesivas burbujas especulativas de la deuda del tercer mundo (década de 1980), las acciones puntocom (1999-2001) y las hipotecas y la propiedad inmobiliaria (2004-2007), ninguna de las cuales hizo apenas nada para impulsar la economía real; pero desde 2008 hemos visto cómo se obstruía la recuperación bajo la helada sombra de una hambruna de crédito.

Una quiebra soberana que impusiera pérdidas a los grandes financieros y no a los ahorradores humildes podría ser una opción adecuada en un caso como el de Grecia. Grandes franjas de la deuda griega deberían ciertamente entenderse como «odiosas» –por ejemplo, los grandes créditos concedidos por los bancos franceses al gobierno de Karamanlis entre 2005 y 2009 para financiar la compra de aviones de caza franceses, o las grandes sumas gastadas en la preparación de los Juegos Olímpicos de 2004–. La quiebra soberana impone un alto precio: a los países que traicionan la confianza de los mercados les resulta durante un tiempo difícil o imposible endeudarse de nuevo. La quiebra de Argentina en 2001 paralizó la actividad económica: se perdieron muchos empleos, cientos de empresas cerraron y los ahorros de miles de familias se desvanecieron. Los intentos de utilizar el trueque para resucitar la economía se demostraron demasiado engorrosos y con frecuencia ineficaces. Sin embargo, el movimiento de los *piqueteros* y una oleada de ocupaciones de fábricas permitieron a algunas empresas sobrevivir hasta recibir la ayuda del gobierno de Kirchner en 2003. Argentina demostró que hay vida después de la quiebra, y también negociaciones. Repudió deudas por un total de 81 millardos de dólares; al cabo de un tiempo su gobierno, deseoso de recuperar las facilidades comerciales normales, ofreció a sus acreedores 35 céntimos por dólar. La mayoría de los acreedores del país, conscientes del endeble estado de la economía argentina, aceptaron la oferta, aunque comparada con otras quiebras la rebaja era severa. Tras una considerable devaluación, el peso argentino se estabilizó con un tipo de cambio competitivo; las exportaciones agrícolas se recuperaron y durante la presidencia de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández los ingresos y el empleo se recuperaron.

## ¿Una salida a la griega?

En el caso de Grecia, la devaluación no sería posible a menos que el país optara por volver al dracma; pero en otros aspectos ya está sufriendo la catástrofe que según la doctrina convencional le traería el repudio de la deuda. Los intentos de evitar la quiebra han provocado ya un colapso económico y el país lleva fuera de los mercados internacionales de capital desde la primavera de 2010. Un repudio parcial haría más sostenible la deuda restante y Grecia podría seguir endeudándose internamente, como lo hacía hasta 2001. Un comentarista ha señalado:

Si Grecia hubiera suspendido pagos a principios de 2010, la deuda griega habría sido sostenible a largo plazo con una rebaja impuesta a los tenedores de bonos considerablemente menor del 50 por 100 del adeudo total. El país habría tenido que endeudarse internamente, quizá emitiendo pagarés (como ya ha hecho) e imponer unos pocos recortes modestos, con efectos suavemente recesionistas. Lo que la troika ha hecho en cambio ha sido proporcionar a Grecia créditos para cubrir su déficit presupuestario sin quebrar, a cambio de recortes presupuestarios cada vez más draconianos, aumentos de impuestos y cambios institucionales de dudoso valor [...] El efecto de esa política ha sido una rápida espiral descendente de la economía. Dado que la deuda sigue creciendo y el país sigue empobreciéndose cada vez más, la deuda es cada vez menos sostenible. La relación entre deuda y PIB ha pasado de 115 a 160 por 100 en menos de dos años<sup>39</sup>.

## IV. UTILIDAD PÚBLICA

Para solucionar los problemas financieros sería preciso abordar el establecimiento de bancos y sistemas crediticios de utilidad pública más allá de los centros nacionales, devolviendo recursos a cada localidad, por un lado, y cooperando con los socios regionales y globales por otro<sup>40</sup>. La propiedad pública básica es una condición necesaria pero no suficiente, ya que las autoridades públicas pueden verse tentadas a sus propios excesos especulativos. Un sistema financiero de utilidad pública tendría como núcleo bancos, agencias reguladoras y fondos sociales de propiedad y contabilidad pública. Las agencias reguladoras deberían informar y empoderar a los ciudadanos individuales y las redes regionales o locales. El modelo neoliberal, por el contrario, entrega bienes y programas sociales públicos a las corporaciones privadas y promueve una mercantilización general de la sanidad, la educación, las pensiones y el medio ambiente.

<sup>39</sup> Stergios Skaperdas, «Seven Myths about the Greek Debt Crisis», University of California, Irvine, de próxima publicación.

<sup>40</sup> Sobre el concepto de «sistema financiero de utilidad pública», véanse Gowan, «Crisis in the Heartland», *NLR* 55, enero-febrero [ed. cast., marzo-abril] de 2009 y Chesnais, *Les dettes illégitimes*, pp. 17-24, 131-136.

Al tiempo que se alientan la propiedad social y las finanzas locales, habría que establecer salvaguardias estrictas para aislar esos fondos frente a las presiones comerciales y especulativas. Los bancos y mutuas constructoras (sociedades de préstamo inmobiliario) locales o provinciales han demostrado que pueden proporcionar buenos servicios si se les impide un «apalancamiento» desde fuera, mientras que pronto se enfangan en distintos problemas si se ven «liberadas» —esto es, desreguladas o privatizadas— y se les permite actuar como bancos comerciales. Las empresas industriales alemanas, por ejemplo, se han beneficiado durante mucho tiempo de los *Landesbanken* de propiedad semipública del país; pero durante la última década, poco más o menos, algunos de ellos cayeron en la tentación de especular con complejos derivados hipotecarios y como consecuencia sufrieron grandes pérdidas. Este fenómeno es otro ejemplo de los peligros de desregular y semiprivatizar las redes de financiación pública; otros casos son las asociaciones de crédito y ahorro estadounidenses, Fannie Mae, muchas antiguas mutuas británicas privatizadas como el Trustee Savings Bank y las cajas de ahorro españolas. Todas ellas habían funcionado bien durante décadas como instituciones de propiedad pública bien reguladas y todas han caído en dificultades una vez que se han desregulado, privatizado o descentralizado.

Los recursos y las empresas públicas deben reabastecerse continuamente para no caer bajo el empuje de la acumulación privada. El economista sueco Rudolf Meidner propuso en 1976 desde la Confederación Sindical *Landsorganisationen i Sverige* el cobro de una cuota anual a las principales corporaciones, cada una de las cuales debía emitir cada año nuevas participaciones equivalentes al 20 por 100 sus beneficios, que serían distribuidas a una red regional de fondos sociales. Esa propuesta tiene la ventaja de que recauda una parte del valor de todas las participaciones, incluidas las resguardadas en paraísos fiscales, y las recibidas por la red de fondos sociales se mantendrían a largo plazo, utilizando los dividendos que generaran para objetivos específicos como la provisión de pensiones<sup>41</sup>. En varios países —en particular Noruega, Australia y China— se han creado fondos soberanos o «fondos de futuro» que actuaron como amortiguadores durante la crisis. Tales fondos pueden invertirse de varias formas promoviendo la capacidad productiva, las viviendas sociales o la protección del medio ambiente, y con ellos se constituyen activos a largo plazo utilizables en caso de acontecimientos impredecibles (desastres naturales) o predecibles (envejecimiento de la población). En algunos países, fondos de jubilación y de pensiones públicamente gestionados desempeñan también ese papel; sus gestores invierten en desarrollo o en infraestructuras sociales pero son cada vez más conscientes de que deben fomentar la sostenibilidad medioambiental. En Estados Unidos y la Unión Europea, en

---

<sup>41</sup> Los capítulos 5 y 7 de *Age Shock: How Finance is Failing Us* contienen información sobre esta experiencia. El plan de «fondos de asalariados» entró en vigor en la década de 1980 en una versión muy reducida y luego fue retirado en 1992 por un gobierno conservador. Sus activos fueron utilizados para establecer una cadena de institutos de investigación que reforzó la economía sueca.



cambio, los principios del libre mercado y los grupos de presión privados han desanimado los programas de inversión pública de larga duración.

Los defensores de la empresa pública y la planificación social del siglo XXI tienen que reconfigurarlas para evitar sus fracasos históricos. Durante los últimos años se han visto llamativos éxitos del desarrollo económico mediante patrocinio público, aunque les acompañaran algunos problemas serios. La industria en los Parques de la Ciencia de Taiwán y la producción agrícola en el *cerrado* semiboscoso de Brasil han permitido a esos países convertirse en los principales abastecedores del mundo en varias de las líneas de producción elegidas para su desarrollo por agencias públicas creadas hace dos o tres décadas, utilizando estratégicamente las subvenciones públicas para crear entidades viables más que para cubrir el déficit operativo. En el caso brasileño ha desempeñado un papel crucial la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que ha conseguido rehabilitar el suelo del *cerrado*, antes un territorio inhóspito cubierto de maleza<sup>42</sup>. Cierto es que, pese a su éxito, los programas patrocinados públicamente en Brasil y Taiwán han creado problemas medioambientales inaceptables, que sin embargo no deberían ser imposibles de resolver si las autoridades públicas y las nuevas entidades productivas tuvieran que responder por su impacto medioambiental ante las comunidades locales.

Desgraciadamente, el éxito de tales programas también los convierte en blancos apetecibles para la privatización, y se observan los crecientes afanes de diversas corporaciones para hacerse cargo de ellos. Las demandas de la economía del conocimiento han favorecido la socialización de los costes de investigación, siendo un excelente ejemplo la red de investigación alemana Fraunhofer, con un personal de 18.000 empleados y un presupuesto anual de 1,65 millardos de euros. Esa red pública ha realizado una contribución vital al éxito de las *Mittelstand* [empresas de medio tamaño] alemanas<sup>43</sup>. China ofrece ejemplos tanto positivos como negativos del empresariado estatal<sup>44</sup>. La enorme escala de la intervención de Beijing ha afectado a la economía global, algo que nunca se pudo decir ni siquiera de la organización comercial más poderosa. En la mayoría de los países grandes o medianos las autoridades públicas también tienen la ventaja potencial del tamaño, una consideración decisiva en una crisis tan profunda como esta.

Los objetivos de cualquier programa nuevo de desarrollo deberían ser estimular el crecimiento impulsado por la inversión, fomentar la sos-

<sup>42</sup> Véase «Brazil's Agricultural Miracle», *The Economist*, 28 de agosto de 2010, y en cuanto al contexto brasileño en general, Emir Sader, *The New Mole*, Londres y Nueva York, 2011. Las vicisitudes de la propiedad pública en Latinoamérica son exploradas por Carlos Aguiar de Madeiros, «Asset-Stripping the State», *NLR* 55, enero-febrero [en cast., marzo-abril] de 2009.

<sup>43</sup> *The Economist*, 5 de febrero de 2011.

<sup>44</sup> Sobre el enfoque innovador de las autoridades de Chongqing, véase Philip C. Huang, «Chongqing: Equitable Development Driven by a "Third Hand"», *Modern China*, primavera de 2011.

tenibilidad, alentar la formación de capital humano y proporcionar un aumento de productividad. Con ese paquete se trataría de desmercantilizar importantes áreas de la vida social, ofreciendo a todos y cada uno libre acceso a una educación y cuidados sanitarios decentes y la posibilidad de opinar y decidir en último término sobre el control de los recursos económicos<sup>45</sup>. Un sistema financiero de utilidad pública, valedor de redes de fondos sociales y sostenido por ellas, podría reconectar las finanzas con el contexto social y democratizar su funcionamiento. El modelo socialista tradicional de economía «nacionalizada» y planificada ha tenido algunos éxitos, y todavía podría aprovecharse en algunas áreas. Es razonable que las redes ferroviarias, la energía eléctrica, las conducciones de agua y otros monopolios naturales sean de propiedad y gestión pública, pero el modelo de economía de mando quedó atrás. Si los mercados son adecuadamente controlados, regulados y socializados pueden desempeñar todavía un papel útil e incluso valioso<sup>46</sup>. La propiedad social de los fondos de pensiones –y su gestión siguiendo criterios de responsabilidad social– pueden añadir una dimensión extra a todo esto. A los reguladores nacionales e internacionales les resultaría difícil disponer de toda la información necesaria para supervisar una miríada de agentes económicos. Los inversores institucionales de propiedad pública podrían añadir otro tipo de «regulación desde abajo» para reforzar la «regulación desde arriba». Podrían, por ejemplo, aprovechar sus poderes como accionistas para fomentar un salario mínimo en el sector exportador de los países con bajo PIB per cápita. El crédito público debería invertir en una economía verde y tratar de reducir la escala de la pobreza global y sufragar los costes del cuidado de los ancianos. La anarquía e incertidumbre de los intercambios globales y los flujos de capital debe ser corregida y regulada de forma que la totalidad de los ciudadanos y comunidades a las que afectan dispongan de información y poder al respecto.

El programa que he esbozado es en muchos sentidos antitético del que se asocia con Hayek, Friedman y la economía «de libre mercado»; pero incluso esa escuela ha aceptado la necesidad, en condiciones extremas, de un estímulo financiero, utilizando helicópteros para lanzar grandes sacos de dinero en todas direcciones. Sin embargo, en la práctica los helicópteros solo arrojan dinero a los bancos. Si imprimir dinero es de interés público, ¿por qué no debería recibirlo todo el mundo? ¿Por qué no deberían los helicópteros lanzar dinero a los pobres, o a toda la población? En una sociedad tan desigual como esta, poner dinero en manos de quienes más lo necesitan sería el mejor modo de estimular la demanda. Además de la introducción de un salario mínimo en los sectores exportadores, el alivio de la deuda a los hogares más necesitados en los países capitalistas avanzados sería no solo valioso en sí mismo sino que también contribuiría

<sup>45</sup> Véanse Diane Elson, «Market Socialism or Socialization of the Market», *NLR* I/172, noviembre-diciembre de 1988; Robin Blackburn, «Economic Democracy: Meaningful, Desirable, Feasible?», *Daedalus*, verano de 2007.

<sup>46</sup> Una argumentación clásica es la de Karl Polanyi en *The Great Transformation*, Londres, 1944 [ed. cast: *La Gran Transformación*, Madrid, La Piqueta, 1989].

a generar una mayor demanda agregada y una perspectiva de crecimiento general. El actual exceso de deuda de los hogares induce estancamiento. El economista australiano Steve Keen propone una estrategia radical de destrucción de la deuda: «los gobiernos deberían dar a la gente una cuota igual de dinero. Los que tienen deudas estarían obligados a pagarlas y los que no las tienen podrían gastar el dinero como quisieran. El resultado sería un nivel de deuda más bajo y mayor capacidad de gasto»<sup>47</sup>. Una estrategia aún más radical consistiría simplemente en cancelar todas las deudas, o todas las que no sobrepasaran determinado nivel (digamos 35.000 libras), pero los más austeros podrían estar en desacuerdo y los bancos sufrirían un golpe. La prima cívica paritaria de Keen sería bienvenida por todos como una forma positiva de reducir la deuda que obstaculiza la recuperación.

Como explicaba el «inspector general» del TARP Neil Barofsky, un rescate «desde abajo» que redujera las cargas de los pobres y mal pagados habría sido más eficaz –y más conveniente para la utilidad pública– que los rescates amistosos de los bancos «desde arriba». Los programas de alivio de la deuda también deberían extenderse a los deudores de créditos estudiantiles. En Gran Bretaña se prevé que la deuda de los estudiantes alcance los 70 millardos de libras en 2015, y es aún más gigantesca en Estados Unidos, donde se espera que pronto alcance el nivel de un billón de dólares, solo una pizca por debajo de la deuda total de las tarjetas de crédito<sup>48</sup>. Siguiendo el espíritu de la financiarización, se invita a los estudiantes y graduados con deudas a gestionarlas en una variedad muy compleja de vías, pero aquellos que realicen una elección desafortunada pueden encontrarse sometidos a un ahogo financiero: en 2009 casi el 9 por 100 de ellos tenían varios pagos atrasados, con consecuencias funestas para su calificación de crédito. La necesidad de pagar tales deudas distorsiona las opciones que afrontan los estudiantes y tiene un efecto de freno sobre la demanda.

Tenemos que reconstruir un concepto de lo público que, aunque no esté totalmente definido por la propiedad pública, deje espacio para ella, para la regulación nacional, la redistribución de ingresos y unos servicios sociales decentes, como corresponde al siglo XXI, época del capitalismo globalizado y la economía del conocimiento. Desde el punto de vista del conjunto de la humanidad, una «industria nacionalizada» representa un interés parcial; cuando invierte en el extranjero, el equilibrio del interés público tendría que dividirse entre al menos dos «públicos» y a menudo muchos más, del mismo modo que dentro de cada país hay que alcanzar un equilibrio entre los intereses de los empleados de una empresa estatal

<sup>47</sup> Como resume Larry Elliot en «Time we wean ourselves off high debt», *The Guardian*, 20 de noviembre de 2011; véase también el blog Debtwatch de Steve Keen [<http://www.debtdeflation.com/blogs>]. Los defectos intrínsecos de las finanzas bursátiles quedaban identificados en el profético libro de Keen *Debunking Economics*, Annandale, NSW, 2001, pp. 251-257.

<sup>48</sup> «Student Loans in America: The Next Big Credit Bubble?», *The Economist*, 29 de octubre de 2011.

por un lado y los del conjunto de los ciudadanos por otro. El «interés público» quedaría mejor determinado por una multiplicidad de instituciones y prácticas que ofreciera un amplio acceso a la información, el debate y la decisión. Mientras los Estados disfruten de soberanía desempeñarán un papel vital clave en facilitar –o denegar– tal responsabilidad democrática y en afrontar el desafío de la crisis. Si los rescates exigen grandes cantidades de dinero público, como ya ha quedado claro, entonces cualquier resultado positivo debería acrecer el potencial de las instituciones públicas, del mismo modo que el gran fondo de pensiones noruego es un legado del rescate de los bancos del país por el gobierno en 1988.

Incluso bajo las restricciones de una sociedad capitalista se pueden hallar instituciones que tienen como objeto la gestión de un interés o preocupación manifiestamente pública. El programa de seguridad social estadounidense o el servicio de salud nacional británico pueden mejorarse, pero durante más de medio siglo han mantenido el principio de la cobertura universal. Ambos programas fueron salvados de repetidas amenazas a su integridad por la movilización de la opinión pública, y aunque siguen afrontando tales amenazas hoy día, muestran que la idea de servicio público puede ser defendida con éxito incluso en el contexto más inhóspito que quepa imaginar.

### *Autopista al desarrollo*

He situado la crisis en el contexto de los desequilibrios y la desigualdad y he propuesto una vía de desarrollo basada en un salario vital, buenas condiciones de trabajo, educación para todos, un nivel decente de atención sanitaria, igualdad de género y elevada capacidad laboral. El impulso necesario a la demanda tendría que venir no solo de salarios más altos sino también de inversiones en infraestructuras y tecnologías verdes, así como en la financiación de pensiones decentes, cuidados sanitarios, educación y sistemas de bienestar. En lo que atañe a los gobiernos y las empresas, el objetivo debería ser seguir la «autopista» de la ventaja competitiva, basada en mejorar los niveles existentes de educación, capacidad y protección social y rehuir los «camino vecinales» que basan la ventaja competitiva en el trabajo esclavo, las diferencias de género y el recorte de los costes sociales.

Este enfoque trata de humanizar la cadena global de transacciones mercantiles utilizando acuerdos internacionales, la legislación nacional, «códigos de conducta» multiagente, derechos laborales y negociación colectiva, representación de la comunidad, reglas de transparencia y compromisos éticos de los agentes empresariales y financieros. La producción y venta de mercancías supone la reproducción de la fuerza de trabajo, y el trabajo asalariado se combina con trabajos de mantenimiento no pagados. El apoyo a los trabajadores que se encargan de ese mantenimiento no pagado engarza con la necesidad de asegurar unas condiciones de trabajo

decentes. Finalmente, los acuerdos económicos deberían pretender algo parecido al pleno empleo y que el crecimiento económico no se base en la dilapidación o ruina de los recursos del planeta.

Tal estrategia está claramente muy lejos de las agendas de los Estados y las clases políticas que ahora gobiernan el mundo; pero sus medidas solo han conseguido hasta la fecha profundizar y perpetuar la crisis. Si ahora empeorara, con una nueva recesión o algo peor en las economías del Atlántico y un frenazo en China, todo se puede venir abajo. En tal caso –y de hecho, en cualquier perspectiva a largo plazo– es vital que se elaboren desde ahora propuestas constructivas para una salida genuina de la crisis hacia la izquierda.